

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS DESAFIOS DE LA IZQUIERDA

Marcelo Solervicens

Este trabajo pretende contribuir al debate sobre la relación entre los movimientos sociales y la izquierda política, vale decir, aquella que está por las transformaciones estructurales y sociales en un proyecto de sociedad que asegure el bienestar de las grandes mayorías y la plena participación de los sujetos sociales. En primer lugar, se buscará establecer, a través de una argumentación teórica, que los cuestionamientos planteados por la acción colectiva de los movimientos sociales tienen una dimensión reivindicativa y una dimensión propiamente social, cuya promoción debe ser incorporada en cualquier proyecto democratizador de la izquierda política. En segundo lugar, se tratará de demostrar que existe una relación entre la forma asumida por la transición y el desperfilamiento de los movimientos sociales. Una relación determinada por la imposición de un discurso hegemónico que valora una concepción elitista de la democracia. Se argumentará, finalmente, que para que la izquierda encabece un proceso de cambios que profundice la democracia política, social y económica, debe abandonar una perspectiva prioritariamente estatal e incorporar la promoción de los movimientos sociales tanto en su ámbito reivindicativo como en su potencial de construcción de Estado desde la base social.

¿Qué son los movimientos sociales?

El concepto de movimientos sociales es un instrumento precario en la medida en que no cuenta con una interpretación unánime en la comunidad científica y mucho menos en los medios políticos. Ello no impide, sin embargo, que sea un dato empírico de la realidad. Su actualidad dice relación con la creciente importancia otorgada a la sociedad civil como contraparte de la acción estatal en los procesos de transformación de las sociedades.

El espectro de lo que constituyen movimientos sociales pueda abarcar al movimiento obrero y campesino, o privilegiar los «nuevos» movimientos sociales producto de nuevas temáticas que se incorporan al quehacer social: los de carácter identitario como el movimiento social de mujeres; los de carácter cultural, como los autonomismos indigenistas; los de carácter religioso como las comunidades eclesiales de base; los de tipo etario como el movimiento juvenil o los grupos de tercera edad, entre otros.

Los movimientos sociales son difíciles de definir sin considerar los enfoques utilizados. No pretendemos, sin embargo, resolver problemas de conceptualización, se trata más bien de entregar ciertos antecedentes para la incorporación de estas experiencias en un proyecto de transformación de la sociedad chilena a partir de la izquierda.

Mario Diani¹ considera que los movimientos sociales son relaciones de interacción informal entre una pluralidad de individuos comprometidos en un conflicto político o cultural sobre la base de

identidades compartidas. Pese a su carácter general esta definición tiene el mérito de definir las fronteras de los movimientos sociales por la existencia de una comunidad de intereses, una identidad de grupo y por una relación de ese grupo con los otros, ya sea el Estado u otros sectores sociales, para obtener respuesta a sus reivindicaciones.

Se trata de una doble dimensión presente en los análisis latinoamericanos: ..."los movimientos sociales se ven nutridos de acción social por el control del sistema político y cultural, hasta modos de transformación y participación cotidiana de autoproducción societal"². Puede apreciarse entonces, un relativo consenso sobre la existencia de una doble dimensión en los movimientos sociales: la dimensión identitaria y la dimensión reivindicativa.

Respecto de la asignación de un carácter «nuevo» a los movimientos sociales existe mayor polémica. La designación de nuevos, en comparación con viejos movimientos sociales parece discutible aún cuando se incorporan aspectos que influyen sobre la constitución y la acción de los movimientos sociales en una historicidad determinada³. En las sociedades desarrolladas la distinción entre viejos movimientos obreros reivindicativos y nuevos movimientos sociales identitarios o referidos a una condición (pacifistas, ecologistas, mujeres, homosexuales, etc.) corresponde a cambios estructurales en la sociedad⁴. En el caso latinoamericano y chileno esta distinción es más difícil porque los «viejos» movimientos sociales no reflejaban la complejidad de las sociedades latinoamericanas (por la existencia de la problemática indígena, por ejemplo⁵). En cuanto a los «nuevos» movimientos sociales hay dudas sobre la existencia de un nuevo marco estructural por la mantención de la segmentación económica y la marginación social en América Latina. Los movimientos sociales urbanos, adscritos al territorio reconocen una influencia de la experiencia del movimiento obrero, lo que podría revelar una línea de continuidad y no de ruptura del movimiento social popular. Finalmente, algunos autores niegan incluso la existencia de nuevos movimientos sociales porque la nueva forma de integración social luego de transformaciones en la estructura de la sociedad privilegian una integración individual y no en términos de movimientos sociales⁶.

Lo importante en el debate sobre los movimientos es que provoca un cambio de paradigma y obliga a un nuevo enfoque de los contenidos, organización y accionar de grupos sociales en la sociedad civil. La conceptualización de los movimientos sociales es un descubrimiento teórico que permite dar cuenta de la politización de las claves de la vida cotidiana. Ello plantea una pregunta: ..."se trata de una nueva realidad o si la vida social siempre fue así, y sólo nosotros ciegos por el peso de los paradigmas dominantes, no la estaríamos viendo"⁷.

Nos encontramos frente a un dato de la realidad y frente a una variación de paradigmas en el análisis de la sociedad civil. La experiencia de los movimientos sociales cuestiona el accionar político de la izquierda basado en una estrategia instrumental de la organización de los sectores progresistas y excluidos del poder político en la sociedad civil. Una revisión de la literatura latinoamericana sobre los movimientos sociales pone en relieve la importancia de introducir esta dimensión compleja a un proyecto democrático popular. Las principales formulaciones latinoamericanas sobre movimientos sociales privilegian su análisis, ya sea en términos de una demanda de integración o como portadores de nuevas formas de participación democrática.

En cuanto a las demandas de integración, es necesario considerar, en primer lugar, las que consideran los movimientos sociales como una acción colectiva orientada al control o la transformación de un sistema de acción histórica. Esta interpretación, fruto de las transformaciones estructurales operadas en las sociedades desarrolladas y la crisis de representación resultante, han llevado a argumentar que la emergencia de movimientos sociales en América Latina está vinculada a las transformaciones operadas por modelos excluyentes de modernización en Chile, Perú, Brasil y otros países. Son una

respuesta al abandono de los modelos de industrialización sustitutiva de importaciones que provoca la desintegración de los tejidos sociales acarreado la marginalidad social o una respuesta a la violencia estatal que acompaña esos procesos.⁸

Por la centralidad que otorga al Estado, como foco de atención de las demandas de los movimientos sociales, esta perspectiva no da importancia suficiente a dinámicas propiamente sociales que no se agotan en su integración o disolución en un nuevo ordenamiento de la sociedad. La pérdida de dinamismo de los movimientos sociales está asociada al surgimiento de nuevos modelos de integración centrados en la acción estatal. Aunque explica la manera en que se supera la crisis del sistema político de representación y la consiguiente recuperación de la centralidad del Estado, no permite dar cuenta del componente propiamente social de esas experiencias.

En segundo lugar, siempre en la perspectiva de las demandas de integración frente al Estado, los movimientos sociales pueden ser vistos como experiencias puntuales animadas por reivindicaciones específicas. Un enfoque de los movimientos sociales, llamado generalmente *teoría de la movilización de recursos*, donde lo esencial no es el contexto histórico-estructural en el cual se desarrollan los movimientos sociales sino cómo se organizan estos movimientos para conseguir respuesta a sus reivindicaciones⁹. Responde a una concepción epistemológica utilitarista de la acción colectiva que prevé acciones racionales ligada a la aplicación de categorías económicas en el análisis sociológico¹⁰. La importancia asignada a las motivaciones individuales hacen difícil considerar la dimensión identitaria de los movimientos sociales¹¹. Esta concepción permite explicar el accionar concreto de los movimientos urbanos pero no su contenido estratégico¹².

La perspectiva que privilegia la experiencia de los movimientos sociales como nuevas formas de hacer política desde la sociedad civil, está presente en el análisis de diversas experiencias latinoamericanas. Se trata de aceptar la existencia de luchas propiamente sociales, que no se agotan en la esfera político institucional y pueden ser entendidas como un movimiento de la sociedad para transformarse en Estado que revela "...una práctica cotidiana como participación en organizaciones sociales y no sólo como representación en las instituciones estatales"¹³. Una concepción que valora la recurrencia de una reticencia histórica de los sectores populares frente a la democracia formal en América Latina. Reticencia, no sólo respecto a los mecanismos de dominación de las oligarquías sino que frente a la apropiación de las decisiones políticas por el poder estatal. En esta perspectiva, los movimientos sociales en América Latina, son un conglomerado heterogéneo unido por una perspectiva crítica frente al poder estatal¹⁴. Se trata de una concepción que privilegia el análisis de la experiencia democrático-participativa de los movimientos sociales, del igualitarismo que conllevan considerándolo un proyecto común que instituye al individuo en sujeto político al mismo tiempo que el grupo. Se rescata la construcción de identidades que no son reductibles a exigencias de integración al sistema político. Sin embargo, su énfasis en la dinámica propiamente social no considera los mecanismos de actualización de ese proyecto en una sociedad basada en una estructura de dominación.

El somero vistazo de la literatura sobre los movimientos sociales permite sugerir que el reconocimiento de la doble dimensión de los movimientos sociales es un requerimiento teórico fundamental en un proyecto por los cambios en la perspectiva de la izquierda política. La experiencia de los movimientos sociales en Chile en los últimos años actualiza, en una práctica concreta esta constatación teórica.

Los movimientos sociales bajo el régimen militar y en la transición

Existe un relativo consenso en cuanto a la existencia de una organización y de un accionar propiamente social de parte de actores sociales durante el régimen militar. El debate se centra más bien en

dos aspectos (1) si esos sectores sociales constituyeron efectivamente movimientos sociales o fueron sólo reacciones anómicas frente a la desintegración social (2) si su accionar fue sólo un resultado de la incidencia de la izquierda política. La pérdida del rol protagónico de los actores sociales pareciera confirmar ambas hipótesis, sin embargo una lectura desde lo social presenta un cuadro de una mayor complejidad, porque el contenido y las experiencias desarrolladas no aparecen absorbidas en las formas y contenidos de la transición. Una situación que se expresa en cierta apatía y descorazonamiento frente a los canales de participación social creados en el nuevo período a partir del Estado.

Los movimientos sociales durante el régimen militar

Un somera descripción permite definir el objeto en debate. Se han escrito numerosos trabajos que insisten en las radicales transformaciones operadas durante el régimen militar y los efectos negativos de la exclusión, fragmentación, desarticulación y desintegración nacional provocados en los sectores populares. Ello lleva a insistir en la forma en que los sectores populares padecieron esa marginalidad social, económica y política. Sin embargo no se ha destacado suficientemente que ... "la exclusión no sólo se «padece» sino que «produce» en el movimiento popular diversas formas de respuesta que tienden a afirmar su vocación transformadora, no sólo de su realidad más inmediata, sino que dando lugar procesos de creación histórica de mayor significado"¹⁵. Es importante considerar en la evaluación de los actores sociales durante el régimen militar, el sobredimensionamiento de la represión gubernamental de todas las expresiones de acción colectiva desarrolladas en el período. Una cuestión que permite realzar la importancia del rol de los actores sociales, en la creación de condiciones para un retorno de la centralidad de los partidos políticos.

En el caso del *movimiento sindical*, su organización y accionar en los marcos institucionales autoritarios y, pese a la reducción de su peso específico por altas tasas de cesantía y cambios en la estructura económica, revelan una identidad apoyada en una conciencia de compartir la explotación, pese a las dificultades de la acción colectiva no se estructura un movimiento sindical dependiente del régimen militar. La conformación de un movimiento sindical limitado en su capacidad reivindicativa y en su fuerza interna por las estructuras sindicales formales, pero con un rol convocador de iniciativas de movilización en su organización de hecho, en el contexto de las protestas de 1983, constituyen un elemento revelador de una experiencia compleja.

Para los *pobladores*, el sentimiento de pertenencia a una comunidad encadenada a un territorio y la solidaridad que ello provoca es un dato fundamental del accionar de los sectores populares¹⁶. A nivel poblacional se desarrolló un complejo y heterogéneo movimiento social poblacional que no puede ser despreciado por su peso específico, si se consideran las condiciones negativas en que se desarrolla. Por un lado, en su parte más efectista, desarrolla iniciativas de protagonismo popular propiamente políticas, —en términos de una exigencia democrática sin concesiones—. Existe un consenso en valorar el dinamismo del actor social poblacional en provocar una dinámica de apertura política por parte del régimen militar, pese a sufrir altos costos producto de la represión.

Es necesario destacar las experiencias de afirmación popular frente a la exclusión. Son experiencias organizativas que responden a una heterogeneidad de iniciativas y dinámicas que comprometen proyectos y movimientos sociales: organizaciones económicas populares, de cristianismo popular, de mujeres, de jóvenes, de derechos humanos y por reivindicativos poblacionales.

La multiplicidad de actores sociales populares que emergen durante el régimen militar son una respuesta a las transformaciones económicas y sociales de la dictadura y donde prima la constitución de sujetos sociales y políticos a partir de una comunidad de intereses que puede servir de base para niveles de organización popular reflejando un dinamismo social que no es desmentido por su

heterogeneidad¹⁷. Ellos pueden, igualmente ser considerados como una actualización de una identidad y una cultura común frente a los «privilegiados» del régimen y como respuesta democrática radical.

Por ello, el desarrollo de los movimientos sociales durante el régimen militar, sobre todo por su relación con el espacio territorial, nos lleva a sugerir la posibilidad de visualizarlos como un movimiento de la sociedad por construir Estado¹⁸. El establecimiento de «territorios liberados» en las poblaciones, por algunas horas, durante días de protesta (de 1983 a 1986) encuentra sus raíces en una cultura política popular y en la experiencia organizativa de los llamados «militantes de base»¹⁹. El momento en que se expresan con mayor fuerza autónoma esos movimientos sociales en Chile es importante para la comprensión del fenómeno: crisis de los proyectos igualitarios de la izquierda política, establecimiento de un autoritarismo radical que niega la sociedad civil. Importante por la existencia de una relación de filiación entre esos movimientos sociales y las tradiciones del movimiento popular, político o social.

Algunos estudios permiten visualizar que esa aspiración de la representación de lo político de manera diferente a la construcción estatal es más «permanente». En estado *latente*, ella no puede manifestarse más que en los momentos de crisis de la representación de lo político en las sociedades del tercer mundo²⁰. La práctica de los movimientos sociales puede plantear una socialización del poder, una autogestión de la economía y una democratización del saber. La reconstitución del movimiento social bajo el régimen militar representa a la vez, una continuidad con los movimientos sociales urbanos de antes de 1973 con características cuantitativas y cualitativas diferentes²¹.

El debate sobre la vigencia de los movimientos sociales

El gran debate actual, sin embargo, dice relación con la desarticulación o falta de protagonismo y de continuidad de los movimientos sociales en la transición democrática. La perspectiva de los movimientos sociales y sus relaciones con las dos vertientes de la izquierda política están directamente ligados a ese debate. Y es que puede sugerirse que la transición chilena aparece ligada a la imposición de un esquema de democracia representativa que excluye la organización de movimientos sociales y la acción colectiva protagonista. Para el debate en la izquierda sobre la importancia de adoptar una posición frente al desarrollo y promoción de los movimientos sociales en la democratización del Estado y la liberación de las dinámicas sociales, es necesario considerar las formas que asumió la transición chilena y cómo la suerte del proceso de transformaciones aparece ligado a una reactualización del dinamismo de los movimientos sociales en su doble dimensión.

Características de la transición chilena

Existe un cierto consenso en cuanto a las características de la transición chilena. En primer lugar, sobre la mantención de la misma orientación económica durante el régimen militar. Una línea de continuidad que redundaba en un resoldamiento de la dominación del modo de producción capitalista de acuerdo a las características que éste asume a nivel mundial en la actualidad.

La importancia de las instituciones y la centralidad de lo político cupular se explica, antes que nada, por una relación de fuerzas que se traduce en la continuidad de las instituciones autoritarias normadas por la constitución de 1980 y la mantención de las prerrogativas de las fuerzas armadas²². No se asiste a una crisis terminal del régimen militar sino a un cambio de signo en los objetivos iniciales de institucionalización autoritaria de la Constitución de 1980 que se traducen en una práctica elitista de la democracia. El régimen militar no estaba en condiciones de perpetuarse «civilizándose», pero pudo sin embargo, por su ubicación estructural, imponer medidas de protección institucional para mantener el tipo

de democracia presente en un acuerdo de gobernabilidad, plebiscitado en julio de 1989, con vistas a asegurar que la democracia no caerá en el «caos populista».

Condicionante de este proceso, fue la utilización de la fuerza o del llamado terrorismo del Estado para aplastar el descontento e implementar disciplina en la sociedad civil forzando una legitimidad originada en la fuerza. La importancia asumida por la continuidad de las instituciones estatales tiene como corolario la subordinación de la movilización y la organización social a la dinámica de la clase política.

El retorno de la centralidad de los partidos se enmarca en un esquema de democracia representativa elitista y se acompaña, a la luz del carácter eminentemente institucional de la transición del régimen militar al régimen civil, con un cuestionamiento del sistema del partidos políticos «poliárquico» existente hasta 1973²³. El nuevo sistema político valora la estabilidad de la disputa por el centro político. La confrontación electoral, en el nuevo sistema político se desarrollaría entre la derecha unida y la centro-izquierda. El proyecto de democracia representativa estable está basado en partidos que no deben pretender representar segmentos de la sociedad, ellos deben defender las instituciones democráticas para consolidar, de ese modo, un sistema político estable y moderno caracterizado por un pluralismo moderado²⁴. Un proyecto político que se plantea el reemplazo de la ideologización, el pluralismo polarizado y el pretorianismo que caracterizaba el sistema del partidos en 1973,²⁵ —que habría sido culpable en última instancia de la crisis del sistema político en ese período²⁶—.

Supone un compromiso formal de respetar las reglas democráticas, —paradojalmente las de la Constitución de 1980—. Los diferentes actores políticos deben tener la flexibilidad necesaria para negociar sus percepciones y objetivos y neutralizar quienes se salgan de las reglas del juego democrático²⁷. En esa perspectiva los partidos políticos en el régimen civil, se transforman en garantes más eficaces que el régimen militar en la defensa de la democracia²⁸. El nuevo rol de los partidos políticos como garantes del sistema democrático *como un todo* y sus normas institucionales determina que otras organizaciones deben reemplazarle en la tarea de la defensa de intereses sectoriales o particulares, pero no existen los canales que vehiculen esa representación por la adopción de un esquema de consensos que engloba a los actores reivindicativos²⁹.

En el nuevo sistema de partidos políticos, la definición de aquellos que no son democráticos es fundamental. Esto explica las críticas en relación a la izquierda totalitaria, violenta, pasada de moda y de un movimiento social que podría interesarse en la satisfacción de sus reivindicaciones inmediatas.

Las condiciones de legitimidad del nuevo sistema están dadas por la fuerza y coherencia de un discurso político que valora el éxito económico del modelo neoliberal asentado en el mercado y en la inserción en la economía mundial como motor del desarrollo en el marco de la modernidad. Por la importancia de un discurso favorable a la democracia representativa, al rol fundamental de las instituciones políticas en la forma pacífica asumida por la transición y la legitimidad del nuevo régimen civil. La estabilidad del nuevo régimen político aparece ligado al respeto de procedimientos legales como base de la convivencia democrática.

Este marco restringe la legitimidad de la organización autónoma de los movimientos sociales y resulta la imposición de un esquema de relación entre el Estado y la sociedad civil basado en la regulación de conflictos mediante la designación de interlocutores sociales enmarcados por instancias sin capacidad de decisión. La experiencia de organización municipal por la vía de juntas de vecinos y centros de madres constituyen mecanismos de participación limitada que no se traducen en la expansión del protagonismo popular. Por otra parte, la insistencia en el conflicto en las instituciones estatales entre

sectores democráticos y sectores autoritarios refuerza los mecanismos de orden y de estabilidad restando legitimidad a la acción reivindicativa por intereses particulares de los movimientos sociales frente al Estado.

En tales condiciones, el éxito fundamental de la transición chilena se ubica a nivel de la eficacia y legitimidad de un proyecto de instauración de la separación de lo político, de lo social y de lo económico que busca la regulación o la autoregulación de los conflictos sociales en el marco institucional existente.

La insistencia en los procedimientos, tiende a fortalecer el ejercicio de lo político al exclusivo dominio de la presidencia o de las otras instituciones estatales. La reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades es un buen ejemplo de esta situación: las negociaciones a nivel del Congreso en vistas a ponerse de acuerdo con la oposición, no permite que se asocien las organizaciones sociales comunales al debate.

El parlamentarismo (y el acuerdo sobre normas y procedimientos) funciona como confrontación de opiniones, sólo en la medida en que deje a nivel de lo privado el debate sobre los valores o cuestiones susceptibles de provocar conflictos. Mientras menos temas conflictuales existan, más posibilidades existen de un buen funcionamiento y una estabilidad del sistema político³⁰. Una concepción de lo político que transforma el juego en tribuna estéril de la clase política por encima de desigualdades tremendas³¹.

El creciente interés por la democracia y las instituciones en la mantención de la estabilidad y el orden, a diferencia de las corrientes dominantes en los años sesenta, favorece la separación del Estado de mercado³², del Estado de lo social y en general, la política de lo social y de lo económico. Ello se expresa en la vigencia del pensamiento occidental clásico que establece como categoría fundacional de lo político un pacto o contrato social, —basado en la distinción entre el Estado y la sociedad civil que no incorpora la dinámica de los movimientos sociales³³—.

El debate sobre la superación del protagonismo popular

El cuestionamiento del protagonismo popular y el desconocimiento de las iniciativas propiamente sociales es consustancial a la instalación de este tipo de proyecto político. Nadie niega que los «pobladores» o sectores populares imaginados se transformaron en un actor multifacético de primer orden e insoslayable en la creación de las condiciones para la transición, pero se destaca el agotamiento de su propuesta al no poder ser canalizada políticamente en la negociación con el poder militar³⁴.

Según Arriagada y otros autores, el actor social de la protestas estaba formado por una masa de miles de individuos sin organización o apoyados por organizaciones débiles y sin financiamiento³⁵. La virulencia de las acciones de protesta y el nivel de organización de la base social variaban según los barrios, no eran una función de los efectos del modelo económico, sino que, más bien, de la tradición del discurso social-popular local³⁶. Existe por lo tanto, una relación directa entre la resistencia de los pobladores y el nivel de acción política y de experiencia organizacional anterior al golpe de Estado de 1973³⁷. La participación activa de las masas de pobladores en las protestas muestra una continuidad y una radicalización de 1983 a 1986³⁸. En ese sentido, la dinámica de las poblaciones, iba más allá de la simple búsqueda de un diálogo con el gobierno militar primando posiciones de diálogo por la insistencia del régimen en mecanismos de represión de la movilización social³⁹.

La tesis más generalizada en los medios intelectuales responde a la proposición de Tironi:

Lo peculiar de la transición democrática chilena es que, en sus contenidos, ella dio preeminencia a los aspectos nacionales y políticos y, en su realización, el rol principal recayó en los partidos políticos sin que los actores o movimientos sociales tuvieran una participación relevante⁴⁰.

Sin embargo, desde la perspectiva de los movimientos sociales, la pregunta que surge, es ¿si existe una relación entre la importancia asignada en la transición a las instituciones y cúpulas partidarias y el descrédito del rol protagónico de los movimientos sociales, de las posiciones llamadas rupturistas y de la política de movilización social que guió el accionar de la mayoría de la oposición hasta 1986?

En otras palabras, ¿no sería la inclusión o la exclusión política de los actores sociales y el grado de participación política deseado o asignado donde se encuentra el aspecto crucial para una lectura de la caracterización del régimen civil que surge del proceso de transición?

El problema central se centra, entonces, en la oportunidad de la construcción y promoción de movimientos sociales frente a un discurso que postula que la desarticulación, la desintegración de la acción política colectiva de los movimientos sociales en las etapas finales de la transición son el resultado del aumento del "individualismo" que resulta en un nuevo modelo de integración social individual producto de la modernización autoritaria de la sociedad chilena.

Sin embargo, en el análisis de la transición chilena es necesario subrayar la importancia adquirida por la reconstitución de la sociedad civil, en particular en los barrios desfavorecidos, durante el régimen militar⁴¹. Una tendencia de la sociedad civil a construir Estado, en el marco de su autonomía relativa⁴². Una percepción que no se agota en la idea de la transición como una salida por la vía de la integración de las demandas populares.

Subrayar la existencia de reivindicaciones que iban más allá de lo verificado en la transición implica rescatar la posibilidad de una lectura crítica de sus limitaciones y plantear la posibilidad de actualización de dinámicas transformadoras desde la base social en el nuevo contexto de interlocución con el Estado. Una posibilidad que debe ser asumida por la izquierda, no en el marco de una visión instrumental de su integración al nuevo sistema político, sino como reconocimiento de que la acción social no se agota en su relación con el aparato estatal. Es el rescate de críticas referidas finalmente a exigencias de participación que van más allá del modelo limitado de participación política propuesto⁴³.

Esto significa rescatar que fue el carácter ingobernable de las masas populares en las protestas⁴⁴, lo que creó las condiciones para la apertura del régimen militar hacia la oposición democrática-liberal y la transición. Que no se puede dejar de lado la marginación de los esfuerzos de producción y de reproducción de la sociedad civil en las etapas finales de la transición y la experiencia de democracia directa existente en los movimientos sociales⁴⁵.

Los movimientos sociales y los desafíos de la izquierda

Los desafíos que enfrentan las dos vertientes de la izquierda dicen relación con reponer la fuerza transformadora presente en los movimientos sociales. Estos están confrontados a una nueva realidad. Se rearticulan y desarrollaron en ausencia de interlocutores estatales, lo que reforzaba su carácter autónomo y su confrontación con el aparato estatal, —que los reconocía sólo como objetos de la represión—. Con la transición se abren espacios de interlocución, pero éstos buscan desarrollar una incorporación y un apoyo a la dinámica política del proyecto de la transición. El desarrollo del acuerdo marco tripartita desperfila la demanda sindical por reformas al código laboral y establece un compromiso subordinado al respeto de los equilibrios macroeconómicos. En el caso del movimiento poblacional, el establecimiento del interlocutor municipal y con instituciones gubernamentales en el marco de proyectos

de desarrollo, obliga a una tecnificación de las demandas poblacionales de acuerdo a las posibilidades que otorga la estrategia de desarrollo con equidad. Se trata de una apuesta al futuro del proyecto modernizador que promueve una participación popular condicionada por los imperativos del mercado y la estabilidad política.

La imposición del proyecto transicional restringe el pleno desarrollo de la organización social en sus aspectos de identidad y reivindicación a una dinámica estatal en la cual sólo participa en el marco electoral sin jugar un rol protagónico.

Frente a esta situación la izquierda aparece en crisis de proyectos alternativos de desarrollo en los cuales esté inserto el protagonismo o la participación popular. Una crisis que aparece ligada a sus dificultades en establecer una relación fluida con el movimiento popular. Pese a que la vocación histórica de la izquierda chilena es la de establecer una interpretación política del mundo popular, de sus demandas, de sus intencionalidades de cambio social y sus utopías de justicia social, igualitarismo y libertad, no aparece hoy día en condiciones de plantear una lectura de las inquietudes del mundo popular. Una parte de ella se formaliza por su instalación en el nuevo sistema político, la otra busca instrumentalizar las demandas excluidas para incorporarse a ese esquema como un reconocimiento de su representatividad política de la sensibilidad popular, pero sin proponer un proyecto sostenido por actores sociales.

Esta constatación, que es más bien un brochazo de la realidad de la crisis de la izquierda, es ofrecida como constatación de las percepciones de actores en el movimiento social popular. Ello refleja la dificultad de la izquierda en abrir horizontes estratégicos a los movimientos sociales populares que permitan profundizar la democracia. Una perspectiva estratégica que permita unificar la izquierda política y la izquierda social sólo puede darse en un cuestionamiento de sus perspectiva principalmente estatista de acción política de la primera. La crisis de proyectos alternativos de la izquierda que comparte con la del desperfilamiento de los actores sociales, dice relación con que, o bien ella ha intentando inscribirse en el Estado heredado de la dictadura para flexibilizarlo mediante reformas o bien aparece hoy buscando una incorporación en el Estado para poder desarrollar su transformación. Pero está ausente, por el momento, el desarrollo de lógicas participativas que coloquen frente al Estado, el contrapeso de la sociedad civil. Lo cautivante del proceso electoral ha sido más fuerte que un proceso de construcción efectiva de la soberanía popular.

Por otro lado, la izquierda no puede vivir jugando a la expectativa de la crisis del modelo neoliberal para ubicarse nuevamente a la cabeza de la inquietud y movilización social frente al Estado, cuando llegue la hora. La constitución del sujeto popular para la transformación social no parte solamente de un proyecto alternativo de transformación social, o del desarrollo de reivindicaciones sociales, puntuales, parte también del reconocimiento de que el desarrollo de la sociedad civil es la base más segura para un proyecto de cambios. Por ello la valoración, no sólo del aspecto reivindicativo, sino de la promoción de la constitución de sujetos sociales y del reforzamiento de la sociedad civil, son factores esenciales a los que apunta el análisis de la experiencia y motivaciones de los movimientos sociales.

SANTIAGO, agosto de 1993

NOTAS

- 1 Mario Diani, "The concept of social movement". *The Sociological Review*, vol.40, N°1, 1992, p.4.
- 2 Fernando Calderón y Elizabeth Jelín, "Clases sociales y movimientos sociales en América Latina: Perspectivas y realidades". *Proposiciones* N°14, 1990, p.174.
- 3 Paul D'Anieri, "New social movements in historical perspective". *Comparative Politics*, vol.22, N°4, 1990, pp.445-458.
- 4 Alain Touraine, "La crise de la representation politique". *Sociologie es sociétés*, vol.15, N°1, 1983, pp.131-140.
- 5 José Carlos Mariátegui, *Sept essais d'interpretation de la réalité peruvienne*, Paris, Maspero, 1968, p.279.
- 6 Eugenio Tironi, *Autoritarismo, modernización y marginalidad*, Santiago de Chile, SUR, 1990, p.30.
- 7 Fernando Calderón y Elizabeth Jelín, op. cit., p.175.
- 8 Pedro Jacobi, "Movimientos sociales en Brazil. Desafíos de la construcción de la ciudadanía". *Nueva Sociedad*, N°111, 1991, pp.54-62.
- 9 Didier Lapeyronnie, "Mouvements sociaux et action politique. Existe-t-il une theorie de la mobilisation de ressources". *Revue francaise de sociologie*, vol.29, N°4, 1988, pp.593-619.
- 10 Mancour Olson, *Logique de l'action collective*, Paris, PUF, 1991, p.199.
- 11 Mark Petracca, "Rational choice approach to politics: A challenge to democratic theory". *The review of politics*, vol.53, N°2, 1991, pp.289-319.
- 12 John Van Til, "Citizen participation in neighborhood transformation". *Urban affairs quarterly*, vol.15, N°4, 1980, pp.439-452.
- 13 Nicolas Lynch, "Las ambiciones de la sociedad por convertirse en Estado". *Socialismo y participación*, N°53, 1991, p.119.
- 14 Orlando Fals Borda, "Reflexiones sobre democracia y participación". *Revista mexicana de sociología*, vol.48, N°3, 1986, pp.115-127.
- 15 Taller de Análisis Movimientos Sociales y Coyuntura, *De cara a la crisis: entre el desencanto y la autoafirmación*, Santiago de Chile, ECO, p.15.
- 16 François Dubet et al., *Pobladores. Luttés sociales et démocratie au Chili*, Paris, L'Harmattan, 1989, p.190.
- 17 Philip Oxhorn, "The Popular Sector to an Authoritarian Regime. Shantytowns Organization Since the Military Coup". *Latin American Perspectives*, vol.18, Issue 67, N°1, Winter 1991, p.67.
- 18 Nicolas Lynch, op. cit., pp.117-128.
- 19 Cathy Schneider, "Mobilization at the Grassroots, Shantytown and Resistance in Authoritarian Chile". *Latin American Perspectives*, Issue 67, vol.18, N°1, Winter 1991, pp.92-112.
- 20 Gabriel Salazar, *Violencia política popular en las grandes alamedas. Santiago de Chile, 1947-1987*, Santiago de Chile, SUR, 1990, pp.71-120.

- 21 Fernando Ignacio Leiva et al., "Chile's Poors in the Struggle for Democracy". *Latin American Perspectives*, Issue 51, vol.13, N°4, p.6.
- 22 Ver: Alfred Stepan, "Las prerogativas de los militares en los nuevos regímenes civiles". *Desarrollo Económico*, vol.27, N°108, enero-marzo 1988, pp.480-504.
- 23 Manuel Antonio Garretón, "Partidos políticos, transición y consolidación democrática". *Proposiciones* N°18, 1990, pp.72-84.
- 24 Eugenio Tironi, op. cit., p.46.
- 25 Giovanni Sartori, *Parties and Party System. A Framework For Analysis*, vol.I, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
- 26 Ver: Manuel Antonio Garretón, *The Chilean Political Process*, Boston, Unwin Hyman, 1989, p.200.
- 27 "...para neutralizar o impedir (la acción) de aquellos que desean abandonar el juego democrático o evitar jugar según sus reglas". Manuel Antonio Garretón, "The Feasibility of Democracy in Chile: Conditions and Challenges". *Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes*, vol.15, N°30, 1990, p.82.
- 28 Una visión que considera como una realidad posible, la exclusión institucional o incluso la desaparición de los partidos políticos, llamados *extremistas* o extrasistema.
- 29 Manuel Antonio Garretón, "Partidos políticos, transición y consolidación democrática". *Proposiciones* N°18, 1990, p.83.
- 30 Annah Arendt, *On Revolution*, New York, Penguin Books, 1979, p.235.
- 31 Paulo J. Krisclike, "Chile Reivents Democracy". *Latin American Research Review*, vol.25, N°3, 1990, pp.221-236.
- 32 Norbert Lechner, "El debate sobre política y mercado". *Nueva Sociedad*, 1992, pp.80-89.
- 33 Thomas Hobbes, *Le citroyen ou les fondements de la politique*, Paris, Flammarion, 1982, p.405. Rousseau, J.J., *Du contrat social*, Paris, Seuil, 1977, p.313.
- 34 Eugenio Tironi, op. cit., p.229.
- 35 Genaro Arriagada, *Pinochet, the Politics of Poder*, Boston, Unwin Hyman, 1988, p.61.
- 36 Cathy Schneider, op. cit., p.92.
- 37 "...la capacidad de estos barrios urbanos en movilizar una masiva resistencia política, pese a una década de severa represión, proviene de la herencia política de décadas de trabajo en la cultura popular y en la formación de una hábil generación de militantes de base". Cathy Schneider, op. cit., p.94.
- 38 Ver: Eugenio Hojman, *Memorial de la dictadura, 1973-1989. Cronología de 16 años de pesadilla*, Santiago de Chile, Editorial Emisión, 1990, p.315.
- 39 Jilberto Fernández, "Military Bureaucracy Political Opposition and Democratic Transition". *Latin American Perspectives*, Issue 67, vol.18, N°1, Winter 1991, p.36.
- 40 Eugenio Tironi, op. cit., p.47.
- 41 Ver: Philip Oxhorne, "Organizaciones poblacionales y constitución actual de la sociedad civil". *Revista mexicana de sociología*, vol.50, N°2, junio 1988, pp.221-238.
- 42 Nicolas Lynch, op. cit., pp.117-128.
- 43 Carlos Ruíz, "Participación y democracia". *Gobierno local y participación social. Debate desde una perspectiva agraria*, Santiago de Chile, GIA, 1988, pp.19-37.

44 Gabriel Salazar, op. cit., pp.121-208.

45 Philip Oxhorn, op. cit., pp.221-238.
